



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud en el Real Sitio de San Ildefonso.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 475.

Recomendando la adquisicion del *Manual de Comercio* de D. Nicolás Cabanillas.

Fomento.

Por la Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio con fecha 20 de julio próximo pasado se me dice lo siguiente.

El Sr. Ministro de Fomento con fecha 5 del corriente dijo á D. Nicolás Cabanillas lo que sigue.—Terminada la comision dada á V. S. por Real orden de 28. de febrero del año último para estudiar en el extranjero las bases, organizacion, contabilidad, objetos y resultados de los Bancos, Sociedades de crédito y demás asociaciones mercantiles; y enterada S. M. del *Manual* que ha publicado V. S. acerca de dichas empresas, comprendiendo en esta publicacion, no solo los estatutos y reglamentos de las mas importantes Sociedades francesas y belgas, sino toda aquella parte consultiva y legislativa que ha precedido á su fundacion, cuya copia de datos forma un verdadero tratado de doctrina y aplicacion de una de las secciones mas interesantes del ramo de comercio; la Reina (Q. D. G.) se ha ser-

vado disponer que se den á V. S. las gracias por el celo, inteligencia y desinterés con que ha desempeñado su cometido, y que se recomiende á las Juntas de comercio, Societades económicas, Delegados del Gobierno cerca de las Compañias mercantiles y demás Autoridades y Corporaciones dependientes de este Ministerio, llamadas por la ley á informar sobre autorizacion de dichas asociaciones, el referido *Manual de Sociedades mercantiles* que ha publicado V. S. como Tratado práctico y digno de ser consultado por cuantos dirigen y proyectan fundar las muchas empresas que pueden ser objeto de la asociacion mercantil.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, y á fin de que lo comunique á las Corporaciones y funcionarios que se indican en la preinserta Real orden.

Lo que he dispuesto se inserte en el *Boletín oficial de la provincia*, recomendando á las Corporaciones, funcionarios y personas ilustradas, la adquisicion del *Manual de Sociedades mercantiles* á que se refiere la preinserta Real orden. Orense agosto 11 de 1859.—P. A., Calixto Varela de Montes.

CIRCULAR NUM. 468.

Encargando la busca de los efectos robados de la Iglesia de san José de la Carballeira, alcaldia de Nogueira de Ramuin.

El Sr. Juez de primera instancia de esta capital con fecha 5 del actual me dice lo siguiente.

En causa criminal que se está instruyendo en averiguacion del autor ó autores del robo de la Iglesia de san José de la Carballeira, alcaldia de Nogueira de Ramuin, cuyos efectos espresa la adjunta nota; he dispuesto dirigir á V. S. atenta comunicacion, á fin de que se sirva dar sus órdenes á los Alcaldes de la provincia de su digno cargo y demás dependientes de su autoridad con objeto de que practiquen averigua-

ciones en busca de los referidos efectos; y caso aparezcan, los remitan á este Juzgado con los sugetos en cuyo poder se hallen, rogándole que de quedar en ejecutarlo se servirá comunicármelo, para que en dicha causa obre los efectos oportunos.

Y en su consecuencia encargo á los señores Alcaldes, puestos de la Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad, procedan á averiguar el paradero de los efectos robados, y de ser habidos ponerlos con los sugetos en cuyo poder se hallen á disposicion de dicho juzgado. Orense 10 de agosto de 1859.—P. A., Calixto Varela de Montes.

Efectos robados.

Diez y seis blandones de cera blanca, peso tres libras cada uno, nuevos aunque estrenados, otro blandon á medio gastar; dos velas, una de media libra y otra de un cuarteron; diez cintas anchas de diferentes colores; una reliquia en medio de dos cristales y el cerquillo de plata.

TERCERA SECCION.

Número 476.

En la Gaceta de Madrid núm. 214 del martes 2 de agosto se lee lo siguiente

Resolviendo un caso de competencia entre el Gobernador y Juez de Hacienda de Barcelona.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador y el Juez de Hacienda de Barcelona, de los cuales resulta:

Que habiendo interpuesto, previo el acto de conciliacion, una demanda en 25 de setiembre de 1857 D. Juan Perello, Cura párroco de la iglesia de Santa Maria del Mar de Barcelona, en calidad de heredero de confianza de D. Felipe Gelabert, ante el Juez de primera instancia del distrito de San Pedro de la misma ciudad,

contra D. José Bosil, sobre pago de las pensiones vencidas de ciertos censos que Bosil habia redimido de la Hacienda pública, considerándolos comprendidos en la ley de Desamortizacion, acudió este al Gobernador de la provincia pidiendo la proteccion de la Autoridad administrativa en razon á estar la redencion formalizada segun escritura, carta de pago y otros documentos, en que constaba la entrega del importe del capital de censos y pensiones vencidas en diciembre de 1836:

Que el Gobernador, despues de oir á la Administracion de Bienes nacionales de la provincia y al Promotor fiscal de Hacienda, resolvió que Bosil debía hacer uso de su derecho ante los Tribunales que ya entendian del negocio:

Que siguiendo el pleito sus trámites y habiéndose recibido á prueba, el Juez de primera instancia, requerido de inhibicion por el de Hacienda, remitió á este los autos; y en virtud de nuevas instancias de Bosil al Gobierno de provincia, abierto de nuevo el expediente gubernativo y oidos el Consejo provincial y la Administracion de Bienes nacionales, el Gobernador requirió de inhibicion al Juez, invocando principalmente el art. 173 de la Instruccion de 31 de mayo de 1855:

Que el Juez, despues de sustanciar el artículo de competencia, sostuvo su jurisdiccion, entre otras consideraciones, porque el mismo Gobierno de provincia la habia ya reconocido en el hecho de haber desatendido la primera reclamacion de Bosil sobre competencia administrativa:

Y que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, se declaró tambien competente, entre otras razones que ya tenia indicadas, porque la Administracion, al remitir en primera instancia á Bosil á los Tribunales, no quiso privarse de reclamar el conocimiento del negocio en lo sucesivo si lo consideraba conducente:

Visto el art. 14 del Real decreto de 4 de junio de 1817, segun el cual, si el Jefe político (hoy Gobernador) desistiere de la competencia, quedará sin mas trámite, expedido el ejercicio su jurisdiccion al Juez requerido de inhibicion y proseguirá conociendo del negocio:

Vista la disposicion 4.ª de la Real orden de 25 de noviembre de 1839 relativo á los expedientes sobre la subasta y venta de bienes nacionales:

Vista la Real orden publicada en 25 de enero de 1819, en que se declara contencioso-administrativo y de la competencia de esta jurisdiccion todo lo relativo á la validez ó nulidad de la venta de bienes nacionales, á la interpretacion de sus cláusulas, á la designacion de la cosa enajena-

de la declaración de la persona a quien se vendió, y a la ejecución del contrato:

Visto el art. 10 de la ley de 20 de febrero de 1857, que determina que corresponden al orden administrativo la venta y administración de bienes nacionales, y se ventilan ante la jurisdicción contencioso-administrativa las contiendas que sobre incidencias de subasta ó de arrendamientos de los expresados bienes ocurrieren entre el Estado y los particulares que con él contratasen, si no hubieren podido terminarse gubernativamente con mutuo asentimiento:

Visto el art. 1.º de la Real orden de 20 de setiembre de 1852, que atribuye el conocimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa, de las cuestiones contenciosas relativas a la validez, inteligencia y cumplimiento de los arrendos y subastas de los bienes nacionales y actos posesorios que de ella se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto en posesión pacífica de los propios bienes; y al de los Tribunales ó Juzgados, las que versen sobre el dominio de los mismos y cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y posteriores a la subasta y sean independientes de esta:

Visto el art. 173 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, que prohíbe que los Jueces de primera instancia u otras Autoridades judiciales admitan demanda alguna contra las fincas que se enajenan por el Estado, sin que el demandante acompañe documento de haber hecho reclamación gubernativamente y sídole negada:

Considerando: 1.º Que el art. 114 citado del Real decreto de 4 de junio de 1847 deja expedita la jurisdicción de los Tribunales de justicia en los casos en que un Gobernador desiste de una competencia ya entablada; pero de modo alguno en aquellos en que, como en el presente, el Gobernador se limita a desentenderse de la primera reclamación de un particular, pidiendo que promueva la contienda; porque con hechos de esta especie no renuncia ni puede renunciar a las facultades que corresponden a la Administración por el expresado Real decreto, en materias esencialmente de orden público, cuales son las de competencia:

2.º Que la cuestión que se agita en el fondo de negocio versa sobre si estaban ó no comprendidos en las leyes de desamortización, en la época en que fueron redimidos los censos pertenecientes a la herencia de confuza dejada por D. Felipe Gelabert, y si en su consecuencia debe declararse ó no nulo el contrato:

3.º Que habiéndose suscitado la cuestión antes del año de la redención de los censos, y teniendo que apreciarse para su resolución ciertos títulos, documentos ó actos que directamente afectan a las formalidades del expediente de subasta, su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo a las disposiciones últimamente citadas:

Oído el Consejo de Estado, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administración:

Dado en San Ildefonso a 28 de julio de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Declaran la mal formada una competencia entre el Gobernador de León y Juez de Astorga.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de León y el Juez de primera instancia de Astorga, de los cuales resulta:

Que la Diputación provincial de León, dió providencia en 20 de junio de 1855, para que no se impidiese por los vecinos de San Roman de la Vega el cerramiento que intentaban Vicente y D. Manuel González, de unos prados que estos habían comprado de la Hacienda pública, en el término de las Huergas, declarando que la

providencia se entendiese, salvo siempre las servidumbres públicas ó privadas que aquellos prados daban, cuyos derechos se repartirían, reservando a los respectivos dueños las acciones que pudieran competirles:

Que a nombre del Concejo y vecinos de San Roman de la Vega, se interpuso un interdicto ante el Juez de primera instancia de Astorga, que fué admitido en 18 de julio del mismo año de 1855, contra Don Manuel González, porque había empezado este a roturar los terrenos de que se ha hecho mérito, privando al propio Concejo ó comun de vecinos del derecho que tienen de entrar en ellos a apacentar sus ganados, excepto en tres meses de los años pares, desde el acolamiento hasta la siega de la yerba; y habiendo recaído auto restitutorio, el Gobernador de la provincia á excitación de González y de la Diputación, requirió de inhibición al Juez, y este se declaró competente, sosteniendo que el auto restitutorio en nada se oponía a la providencia de la Diputación provincial en que se autorizaba el cerramiento de la precitada finca, salvo siempre las excepciones de servidumbres públicas ó privadas; y que aquella declaración correspondía en todo caso a la Autoridad judicial por tratarse de un terreno de dominio particular:

Que apelado este auto y habiendo sido confirmado por la Audiencia, fué comunicado al Gobernador, quien oída la Diputación en funciones de Consejo provincial, manifestó al Juez en 18 de setiembre de 1856, que desistía de la referida competencia sobre la roturación y el cerramiento del prado de las Huergas; y en su consecuencia se mandó llevar a efecto el auto restitutorio en 13 de octubre siguiente:

Que así las cosas en 4 de febrero del corriente año, se interpuso ante el mismo Juez otro interdicto á nombre del Concejo y vecinos de San Roman de la Vega, haciendo relación de los expresados antecedentes, y dirigido contra varios sujetos que habían abierto una zanja y arado los enunçados terrenos de las Huergas; pertenecientes ya á otros dueños, en virtud de nueva venta particular; y habiendo recaído también auto restitutorio, el Gobernador á excitación del actual propietario Don Evaristo Blanco Castilla, requirió al Juez de inhibición, invocando la providencia de la Diputación provincial de 20 de junio de 1855, en su lugar referida, la Real orden de 8 de mayo de 1839, y otras disposiciones:

Que el Juez, previos los trámites establecidos para la sustanciación de estos conflictos, se declaró competente, fundándose en que los términos de la inhibición propuesta eran los mismos de la de 1855 de que desistió el Gobernador en 1856, sin que después de este hecho resultase acuerdo alguno administrativo, contra el cual se haya dirigido el presente interdicto, en el que son los mismos que los anteriores, los despojados y el terreno en que se causó la innovación, á igual sustancialmente la clase del acto expoliatorio; y en que de todos modos, mediando el anterior desistimiento de la Administración, á pesar del acuerdo de la Diputación provincial, ya no hay términos hábiles para nueva discusión ni sobre el acuerdo ni sobre el negocio mismo. Y por último que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en la competencia en consideración: primero, á que el interdicto actual se había propuesto por el pedáneo con el comun de vecinos de San Roman, siendo así que los pedáneos no tienen facultad para representar á los pueblos en juicio ni fuera de él, á no ser con autorización de sus superiores gerárquicos; y segundo á que el desistimiento anterior de la Administración, no era á su juicio bastante para privar al anterior ejercicio de sus atribuciones en el negocio:

Visto el art. 3.º, párrafo quinto del Real decreto de 4 de junio de 1847, que prohíbe á los Jefes políticos, hoy Gobernadores, suscitar competencias por falta de la

autorización que deben conceder cuando se trate de pleitos en que litiguen los pueblos ó establecimientos públicos:

Visto el art. 11 del mismo Real decreto, que determina que si el Jefe político desistiese de la competencia, quedara sin mas trámites expedito el ejercicio de su jurisdicción al Juez requerido, y proseguiría conociendo en el negocio:

Considerando que con arreglo á los artículos citados del Real decreto de 4 de junio de 1847, ni la falta de autorización del pedáneo para representar en juicio al pueblo, es causa de incompetencia, ni el Gobernador ha podido suscitar la presente, mediando el desistimiento de la propia Autoridad en un negocio que es el mismo actual, por cuanto son ahora los mismos que en 1856 la servidumbre que se disputa y el predio sobre que se supone que gravita, siendo además los mismos los querellantes y la persona legal del querrellado:

Oído el Consejo de Estado, vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no ha lugar á decidirla.

Dado en San Ildefonso a 28 de julio de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Resolviendo un caso de competencia entre el Gobernador de León y Juez de Sahagún.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de León y el Juez de primera instancia de Sahagún, de los cuales resulta:

Que ante la Autoridad municipal de Villacabuey y hombres nombrados por este pueblo y el de Santa María del Rio, convinieron en 3 de febrero de 1857 la mayor parte de los contribuyentes de ambos pueblos, que se habían intrusado en terrenos del término de Foncavada, en dejar estos terrenos, y en que los hombres juramentados, á quienes daban poder para ello, entrasen en sus posesiones y las omojonasen como en conciencia debieran estar, sin que perjudicaran á los bienes comunales y conforme al régimen que los mismos tenían establecido en el concepto de que el que en adelante alterase lo que aquellos hombres hicieron sería rigurosamente castigado; en cuyo convenio aparecen las firmas de los indicados contribuyentes en considerable número, juntos y en comun, entre ellas las de Manuel Moral, Manuel Carrera y Atanasio Gutierrez:

Que en 30 de abril del año siguiente de 1858, y ante el Alcalde y Síndico del Ayuntamiento de Villaselán, compareció el pedáneo de Santa María del Rio, como Presidente de los términos comunales en su dominio útil, titulados Foncavada, quejándose de los abusos y excesos cometidos en aquellos terrenos por el levantamiento de mojones, apertura de regueras y daños en los campos, ejecutados por varios vecinos del mismo Santa María y de Villacabuey, entre estos Manuel Moral, Basilio y Manuel Carrera y Atanasio Gutierrez, siendo así que habían ofrecido varias veces volver los terrenos á su primitivo estado; y el Alcalde, oídas las contestaciones de estos y en vista de todo lo que resultaba y de que no habían cumplido los vecinos de que se habla con lo que varias veces prometieran, autorizó al pedáneo para que por medio de peritos y con citación de los terratenientes colindantes con los bienes comunales, se fijasen los linderos y cercasen las regueras que causasen perjuicio; y arreglado todo, se remitiese testimonio al Gobernador de la provincia para que acordase lo que fuera oportuno:

Que en su consecuencia se procedió á la designación pericial de los terrenos usurpados al comun, de las regueras arbitrariamente abiertas y de los daños causados; y el Alcalde dió providencia en 22 de mayo del indicado año de 1858, en la cual, teniendo presente que los vecinos de los referidos pueblos convinieron en dejar

el terreno mal adquirido y abonar el daño causado en 1857, y que no le cumplieron, y que lo mismo había sucedido en 1857, mandó que se hiciese saber la última declaración pericial á los sujetos á quienes hacia referencia para su cumplimiento dentro de quinto día; y remitió el expediente al Gobernador á fin de que dictara una resolución en el mismo, toda vez que según sus noticias, los interesados acudían al juzgado de primera instancia del partido:

Que el Gobernador, en 12 de agosto de 1858, de acuerdo con el Consejo provincial, mandó al Alcalde que hiciera cumplir su providencia de 22 de mayo; y ejecutado así, comparecieron ante el juez de primera instancia separadamente Atanasio Gutierrez, Manuel y Basilio Carrera y Manuel Moral, con cuatro interdictos contra personas particulares, pidiendo que se sustanciase en su audiencia de estos, y que se les restituyera, previa información testifical, en la posesión en que estaban de ciertas regueras abiertas en heredades de su pertenencia, sitas en el campo denominado de Foncavada:

Que admitido el interdicto conforme á lo solicitado, y habiendo recaído auto restitutorio, el Gobernador, enterado por el Alcalde y oído el Consejo provincial, requirió al Juez de inhibición, invocando principalmente los artículos 74 y 8.º de las leyes de Ayuntamientos y Consejos provinciales:

Que el Juez, después de sustanciar el artículo de competencia, sostuvo su jurisdicción en consideración, principalmente, á que haciendo largo tiempo, según resultaba de algunas declaraciones de las informaciones testificales, que habían estado en posesión de las regueras los querellantes, no eran de admitir respecto á ellas los actos conservatorios de la Autoridad municipal, y en todo caso no constaba en el Tribunal que los querellados hubieran obrado de orden de la misma Autoridad:

Y por último, que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en esta competencia:

Visto el artículo 74, párrafo segundo y quinto de la ley de 8 de enero de 1845, en que se determina que corresponde al Alcalde, como Administrador del pueblo y bajo la vigilancia de la Administración superior, el cuidado de la conservación de las fincas pertenecientes al comun y de todo lo relativo á policía urbana y rural:

Visto el art. 5.º, párrafo 6.º de la ley de 2 de abril de 1845, según el cual corresponde al Jefe político, hoy Gobernador, suspender, modificar ó revocar, según lo exijan las circunstancias y con tal que no se opongan á ello las leyes ó los decretos y órdenes del Gobierno, los actos de las Autoridades, corporaciones y agentes que dependen del Ministerio de la Gobernación:

Vista la Real orden de 8 de mayo de 1839, que prohíbe dejar sin efecto por medio de interdictos los acuerdos de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de sus atribuciones legítimas:

Considerando:

1.º Que siendo como es manifiesto, reconocida, pública y de toda notoriedad, según los convenios de los vecinos y acuerdos dictados por la Autoridad municipal del distrito de Villaselán, al menos en los años de 1851, 1857 y siguiente, la usurpación que sufren los terrenos del comun llamados de Foncavada, ha estado, en su lugar, con arreglo á los artículos citados de las leyes de 8 de enero y 2 de abril de 1845, la providencia del Alcalde de 22 de mayo de 1858, mandada cumplir por el Gobernador de la provincia, y que ha tenido por objeto ejecutar definitivamente lo que diferentes veces se había concertado con los mismos vecinos usurpadores, y resuelto legalmente y sin violencia en una materia esencialmente administrativa, cual es la de conservación de bienes comunales.

2.º Que contra providencias dadas con

...ales, antecedentes y circunstancias por la
Autoridad administrativa, en materia de
su atribución, solo en el admitir la recla-
mación a la Autoridad del mismo orden,
ó a demanda ordinaria de posesión ó de
propiedad; pero son improcedentes los in-
terdictos conforme a la Real orden ago-
stas mencionadas de 8 de mayo de 1839,
que tiene por objeto impedir que los Tri-
bunales de justicia puedan reformar ó
anular, en ningún caso, en juicio sumari-
so los actos legítimos de las Autoridades
reconocidas, mucho menos sin oírlos, ni
siquiera conocer sus actos, cual sucedería
en los interdictos de que se trata, sustan-
cialos según con toda deliberación fueron
propuestos, sin audiencia de los quere-
llados.

Oído el Consejo de Estado, Vengo en
decidir esta competencia á favor de la Ad-
ministración.

Dado en San Ildefonso á 28 de julio de
1839.—Está rubricado de la Real mano.
—El Ministro de la Gobernación, José de
Posada Herrera.

Lo que se inserta en el "Boletín oficial
para conocimiento del público: Orense 15
de agosto de 1839.—A. Calisto Va-
rela de Montes.

Continúan los Estatutos y Reglamen-
tos de la Sociedad Valenciana de
Crédito y Fomento.

TITULO IV.

Capital, acciones y obligaciones.

Art. 8.º El capital de la Sociedad será
de 50 millones de reales, representados
por 25,000 acciones de 2,000 rs. cada
una, divididas en series, cuya emisión se
verificará en virtud de acuerdo del Con-
sejo de Administración. La primera serie
de acciones será de 12,500, y se emitirán
entre los accionistas á proporción de lo
que cada uno posea de la Sociedad de Fo-
mento, satisfaciendo el 32 por 100 de su
valor.

Art. 9.º Las acciones de la segunda
serie se irán emitiendo sucesivamente, se-
gún lo exijan las necesidades de la Socie-
dad. No podrá hacerse ninguna emisión
por un precio menor del valor nominal
que representan las acciones.

El capital que se vaya realizando, res-
ponde de todas las operaciones sociales.

Art. 10.º Los accionistas que lo son de
la Sociedad de Fomento, ó las personas
que los representen con arreglo á derecho,
tendrán preferencia para la suscripción de
las nuevas acciones que en lo sucesivo se
emitan, á razón de una cuarta parte en
la segunda emisión, y de una quinta en
las restantes. Los tenedores de acciones
tendrán igual derecho á prorrata de ellas
que poseen en la segunda emisión por dos
cuartas partes, y en las sucesivas por tres
quintas.

Art. 11.º Las acciones serán al porta-
dor, estarán numeradas correlativamente,
llevarán de los Administradores, del De-
legado del Consejo y el sello de la Socie-
dad; podrán cotizarse y negociarse en las
Bolsas del Reino, y tendrán las considera-
ciones de los efectos públicos para los de
la contratación.

No tendrá efecto contra los cedentes de
estas acciones lo dispuesto en el art. 283
del Código de Comercio.

Art. 12.º Las acciones son indivisibles,
y al poseedor corresponden todos los de-
rechos que de ellas procedan.

Dar derecho á una parte proporcional
en el capital y beneficios de la Sociedad,
y la suscripción ó posesión de una ó varias
acciones lleva consigo la obligación de so-
metérse á los estatutos y reglamentos y á
los acuerdos de la Junta general.

Los tenedores de acciones están obliga-
dos á satisfacer el valor nominal de las
mismas en las épocas que se les reclaman.

Art. 13.º El importe de las acciones se
hará efectivo en la Caja de la Sociedad, á

cuyo fin el pago de los dividendos pasivos
se anunciará siempre con 20 días de anti-
cipación, á lo menos, insertando el anuncio
en la Gaceta oficial de Madrid y en los
Boletines de Valencia y Barcelona.

Art. 14.º El Consejo de Administración
fijará las épocas en que han de hacerse
los pagos, y podrá autorizar el pago anti-
cipado del total de las acciones por una me-
dida general aplicable á todos.

Art. 15.º En los títulos de las acciones
se anotarán los pagos de los dividendos; y
los que no contengan la correspondiente
anotación, quedarán sin curso.

Art. 16.º Las acciones que estén en
descubierto en las épocas fijadas para los
pagos quedarán de derecho caducadas, sin
necesidad de declaración judicial ni de la
intervención de ninguna Autoridad.

El Consejo de Administración estará
autorizado para vender las acciones que se
encuentran en este caso, por medio de
Agente de Bolsa ó Corredores de número,
expidiendo al efecto títulos por duplicado.

El producto de la venta de las acciones
caducadas se aplicará al pago de los divi-
dendos no satisfechos: el sobrante, si lo
hubiere, se entregará al tenedor de ellas
que incurrió en la caducidad, con deduc-
ción del 6 por 100 anual por el tiempo
de la demora.

Si los tenedores morosos solicitaren la
adquisición de las acciones antes de la
venta, podrá concedérseles siempre que
abonen el interés del 6 por 100 anual,
correspondiente al tiempo transcurrido
desde el vencimiento hasta el día de la
propuesta.

Art. 17.º Todo accionista podrá depo-
sitar sus títulos en Valencia en la Caja
social, y en los demás puntos en las de las
Sucursales, agencias ó corresponsales de
la Sociedad. El Consejo de Administración
fijará la forma del resguardo y las condi-
ciones del depósito.

Art. 18.º Los herederos y acreedores
de un accionista no tienen derecho á pe-
dir la intervención ó retención de los bie-
nes y valores de la Sociedad, ni su divi-
sión ó venta judicial, ni á mezclarse en
ninguno de los actos de su administración;
para ejercitar sus derechos deberán con-
formarse y atenerse á los inventarios so-
ciales y á las resoluciones de los accionis-
tas conforme con los Estatutos.

Art. 19.º Las obligaciones que emita
la Sociedad con arreglo al párrafo 5.º
art. 4.º de la ley, serán al portador y á
plazo fijo con la amortización é intereses
que se determinen. Interin no se haya he-
cho efectivo el capital, la Sociedad solo
podrá emitir el quintuplo de la parte rea-
lizada en obligaciones ó vencimientos á
más de un año, y hasta diez veces su im-
porte cuando el capital se halle realizado
por completo.

La suma de obligaciones á plazos me-
nores de un año, unida á la de las canti-
dades recibidas en cuenta corriente, no
podrán en ningún caso exceder del doble
del capital efectivo de la Sociedad.

TITULO V.

Administración de la Sociedad.

Art. 20.º La Sociedad será adminis-
trada por la Junta general de accionistas,
un Consejo de Administración, un Direc-
tor y un Subdirector.

SECCION PRIMERA.

De la Junta general.

Art. 21.º La Junta general, constitui-
da legalmente, representa á todos los
accionistas.

Art. 22.º Se compondrá de los accio-
nistas que á lo menos posean 20 acciones,
que presentarán en la Caja de la Sociedad
ó en la de las sucursales ó agencias quince
días antes de la reunión de la Junta.

Para acreditar el día y hora en que se
ha hecho el depósito se expedirá un res-
guardo nominal.

Desde la convocatoria se podrá de

manifiesto á los accionistas que lo pidan
la lista de los que tengan derecho á con-
currir á las juntas.

Art. 23.º El derecho de asistencia no
puede delegarse sino en otro accionista
que lo tenga por derecho propio.

Las mujeres casadas; los menores, las
corporaciones y establecimientos públicos,
podrán hacerse representar por sus mari-
dos, tutores, curadores y administradores
respectivos que acrediten su legitimidad.

Art. 24.º La Junta general ordinaria
se celebrará todos los años el día 1.º de
marzo en el domicilio de la Sociedad; ha-
brá además reunión ó Junta extraordina-
ria siempre que la juzgue necesaria, y la
convoque el Consejo de Administración.

Art. 25.º Las convocatorias se anuncia-
rán dos meses á lo menos, antes de la reu-
nión por avisos que se insertarán en lo-
periódicos designados en el art. 13.

Art. 26.º La Junta general quedará le-
gítimamente constituida, siempre que los
individuos presentes ó representados pa-
sen de 40, y sean tenedores de la cuarta
parte de las acciones emitidas.

Art. 27.º Si no concurren el número
suficiente de accionistas después de la pri-
mera convocatoria, se hará una nueva con
el intervalo á lo menos de 15 días. En es-
te caso queda reducido á 20 el número de
accionistas que deliberarán válidamente;
pero no podrán ocuparse de otros asuntos
que aquel ó aquellos para qué hubiesen
sido convocados.

Art. 28.º El Presidente del Consejo de
Administración presidirá la Junta general,
y á falta de éste el que deba sustituirle.

Serán escrutadores los dos mayores ac-
cionistas presentes, y en caso de no pre-
starse á ello, los que le sigan por orden.

El Presidente y los escrutadores nom-
brarán al Secretario de la Junta general,
quedando con él constituida la mesa.

Art. 29.º Los acuerdos de la Junta ge-
neral se tomarán por mayoría absoluta de
votos presentes y representados.

La posesión de 20 acciones da derecho
á un voto; la de 40 á dos, y así sucesiva-
mente un voto por cada 20 acciones.

Nadie puede, sin embargo, tener por sí
ni delegar mas de 10 votos, sea cual fue-
re el número de acciones que posea; pero
cualquier accionista podrá ejercer el de-
recho de todos los que le hayan encargado
su representación, siempre que cada uno
de las representados no tenga mas de 10
votos.

Art. 30.º El Presidente del Consejo
de Administración, ó el que haga sus ve-
ces, fijará el orden y objeto de la disca-
sion: no podrán discutirse mas proposicio-
nes que las que presente el Consejo de
Administración, y las que hayan sido pre-
sentadas al mismo 12 días antes, á lo
menos, del señalado para la reunión de la
Junta, autorizadas con la firma de 10 ac-
cionistas que tengan voz y voto. En las
reuniones extraordinarias no se discutirá
otro asunto que aquel para qué hayan
sido convocadas.

Art. 31.º Siempre que se reúna la
Junta general, podrá celebrarse todas las
sesiones que considere necesarias para el
ejercicio de las facultades que le competen,
según el reglamento de 17 de febre-
ro de 1818 y los presentes Estatutos.

Art. 32.º Las decisiones de la Junta
general tomadas de conformidad de los
Estatutos, serán obligatorias para los ac-
cionistas, ausentes ó disidentes, lo mismo
que para los votantes.

Art. 33.º Las elecciones de personas se
verificarán en escrutinio secreto y por
mayoría absoluta de votos. Si en la prime-
ra votación no reuniese ningún individuo
esta mayoría, se repetirá entre los tres que
hubiesen alcanzado mayor número de vo-
tos, y en este caso bastará la mayoría re-
lativa. Si todavía resultase empate, que-
dará elegido el que posea mas acciones, y
en igualdad de circunstancias el de mayor
edad.

Art. 34.º Los acuerdos de la Junta ge-
neral se consignarán en un acta que con-
tenga la lista de los individuos presentes:

...las actas serán autorizadas por el Presi-
dente é individuos de la mesa, y se guar-
darán en un libro especial.

Cuando sea necesario justificar los acuer-
dos de la Junta general, se darán copias é
certificaciones del libro de actas por el Se-
cretario del Consejo, autorizados del Pre-
sidente ó del que haga sus veces.

Art. 35.º Desde 15 días antes del so-
ñado para la reunión de la Junta gene-
ral, se pondrá de manifiesto á los accio-
nistas que tengan derecho á asistencia los
libros de contabilidad, inventarios y balan-
ces de la Compañía.

Art. 36.º Corresponde á la Junta ge-
neral:

1.º Nombrar los individuos del Con-
sejo de Administración, eligiéndolos entre
los accionistas que reúnan los requisitos
necesarios, según los presentes Estatutos.

2.º Liberar sobre la memoria ex-
presiva de la situación de los negocios so-
ciales, que debe presentarse anualmente
el propio Consejo.

3.º Elegir una comisión de su seno
encargada de examinar las cuentas y ar-
bitrio anual que presentara la Adminis-
tración.

4.º Aprobar ó disaprobar dichas cuen-
tas y balance, con vista de la censura he-
cha por la indicada comisión.

5.º Acordar en cada año, con presen-
cia del balance general, y conforme á los
Estatutos presentes, los dividendos de be-
neficio repartibles.

6.º Deliberar sobre las proposiciones
del Consejo de Administración respecto al
aumento del capital social, á la prolonga-
ción de la existencia de la Sociedad, á las
modificaciones que se crea útil introducir
en los Estatutos, y á la disolución de la
Sociedad antes de espirar el término de
su duración, si se creyere necesaria.

7.º Finalmente, examinar, resolver y
acordar lo que considere oportuno sobre
todos los demás puntos que especialmente
se asignan á la Junta general en los di-
versos artículos de estos Estatutos y Re-
glamentos.

(Se continuará.)

QUINTA SECCION.

Juzgado de 1.ª instancia de Orense.

Don Manuel Vazquez, alguacil comi-
sionado por el señor juez de primera
instancia de la ciudad y partido de Oren-
se, para hacer pago á don José María
Rebollo, del lugar y parroquia de Santa
Maria de Mugares, alcaldia de Toén, de
la cantidad de 275 rs. y 23 mrs. que es
en deber á don Jacinto Perez Vivero,
procurador de número en la Audiencia
de este territorio.—Hago notorio por-
que estoy entendiendo en procedimiento
ejecutivo para verificar el pago de que
váy hecho mérito contra don José María
Rebollo, en cuya vista le he encargado
los bienes siguientes:

1.º Al término de Rial, 58 copelos de
viña yermas, rasa, linda por naciente he-
rederos de José Bande, poniente Juan
Feijó, sur Francisco Borrado y norte
Ramon Rodriguez; relasada en 64 rs.

2.º Al término de Foro, 29 copelos
de viña rasa y yermas, linda por naciente
Josefa Fernandez, poniente herederos
de José Alvarez, sur y norte Ventura Al-
varez; relasada en 66 rs.

3.º Al término de Lucenza, 29 co-
pelos de labradío secano y monte, linda
por naciente herederos de Pedro Ro-
driguez, poniente José de la Cruz, sur
herederos de don Celestino Ogando y
norte camino público; relasada en 52 rs.

4.º Al término de Cortello do Vello,
16 copelos de monte y algunos peñascos,
linda por naciente, poniente y sur Ra-
mon Rodriguez da Cal y norte don José
Villamarin; relasada en 40 rs.

5.º Al término das Quintas, 4 cope-
los de soto, linda por naciente Benigno
Rebollo, poniente Francisco Rebollo, sur

Domingo Fernandez y norte herederos de Baltasar Fernandez; retasada en 45 rs.

6.º Al término da Bouza, 15 copelos de monte y peñascos, linda por naciente herederos de José Alvarez, poniente monte común, sur y norte Pedro Alvarez; retasada en 14 rs.

7.º Al mismo término da Bouza, otros 15 copelos de monte y peñascos, linda por naciente Manuel Fernandez, poniente monte común, sur Ventura Alvarez y norte Pedro Alvarez; retasada en 41 rs.

8.º Al término da Pumar, 54 y $\frac{1}{2}$ copelos de terreno labrado, regadio y algún prado, linda por naciente herederos de Clemente Gonzalez, poniente Ignacio Gonzalez, sur Josefa do Souto y norte Luis de Bande; deducidas 8 cuartas de vino renta anual al señor de las Pizocas, retasada en 506 rs.

9.º Al mismo término 10 y $\frac{1}{2}$ copelos de terreno labrado regadio, linda por naciente y sur Ignacio Gonzalez, poniente don Benito Bande y norte Luis de Bande; retasada en 170 rs.

10. Una casa de alto y bajo, sita en el lugar de Mugares y barrio nominado de la Iglesia, linda por naciente y sur Manuel Rehollo, poniente y norte camino público, cuya casa se halla en la actualidad bastante deteriorada y cerrada sobre sí; retasada en 1,274 rs.

11. Otra casa de alto y bajo sita en el referido Mugares y barrio nominado Pasadizo, compuesta de una sala, dos alcobas y cocina en parte fayada, linda por naciente, poniente y norte calles públicas y sur herederos de Ramon Perez Novoa; deducidos 50 rs. renta anual al señor de las Pizocas; retasada en 1,906 rs.

12. Por último, otra casa con algún piso pero bastante deteriorada, sita en el expresado lugar de Mugares y barrio nominado de la Iglesia, linda por naciente casa del deudor don José Maria Rehollo, poniente y norte Pascua de Bande y sur calle pública; libre segun se reconoce; su valor 490 rs.

Las personas que quieran interesarse en su adquisicion pueden concurrir á mi casa de habitacion sita en la calle de las Mercedes núm. 19, á hacer los conducentes posturas que les serán admitidas cubriendo las dos terceras partes de su justiprecio y celebrará remate en el mas ventajoso licitador el día 29 del que rige y hora de once á doce de su mañana en la plaza del pueblo de Mugares donde se hallan sitos los referidos bienes. Y para que llegue á noticia de todos, se publica por medio del presente. Dado en Orense á 3 de agosto de 1859.—Manuel Vazquez.

Don Bernardo Maria Herrás, juez de primera instancia en comision de la ciudad y partido de Orense.—Hago saber que en este juzgado y por el oficio del que autoriza, se instruye causa á virtud de parte la lo por el pedáneo de la parroquia de Santa Maria de Mugares, alcaidia de Toen, por lesiones que se dice haber recibido en la cabeza Josefa Fernandez, del lugar del Moreiro, en dicha parroquia; y como de las diligencias practicadas, aparece que la indicada ofendida se ha ausentado, sin saberse su paradero, por auto del día de ayer, he acordado se anuncie su ausencia en el Boletín oficial de esta provincia, con encargo á las autoridades de la misma, para que se sirran disponer que siendo habida la citada Josefa Fernandez, la remitan y pongan á disposicion de este juzgado. Dado en la ciudad de Orense á 10 de agosto de 1859.—Bernardo Maria Herrás.—Por mandado de S. S., Antonio Mendez.

Idem de Arzuá.

Don Luis Genton y Alvarez, juez de primera instancia en la villa de Arzuá y su partido etc.—A los señores jueces de primera instancia, alcaldes de los ayuntamientos y demas autoridades ante quienes fuere visto el presente, sirvanse saber que en este de mi cargo y por la escribania del que autoriza se instruye causa criminal contra Manuel Nogueira Trigás, natural de San Martin de Sagro, vecino de Santa Maria de Amarante, y Antonio Garcia Rivas, de Santa Maria de la Castañeda, sobre robo ejecutado en la taberna de la Peroja parroquia de Santa Maria de los Angeles á cargo de Ramon Perez, y en la de Rosa Cotos, en San Pedro de Presaras. Por resultado de ello se formuló por el promotor fiscal escrito de acusacion, de que por auto de 13 de julio último y término de 9 dias se les confirió traslado para notificarlo y evacuarlo en la forma ordinaria siempre que no se conformasen con la pena correccional solicitada, se dirigió exerto al juzgado de Ordenes en cuya cárcel se hallaban á resultas de otro procedimiento. Mas como de las diligencias allí practicadas aparece que el Trigás en la madrugada del 28 se fugó de la indicada cárcel sin que pudiese ser notificado, acordé hacerlo por medio del presente edicto; con apercibimiento de que no concurriendo á evacuar el traslado que se le concedió, ó conformarse en su caso dentro de los 9 dias, el asunto seguirá su curso parándole el mismo perjuicio, rogando á las indicadas autoridades, que siendo habido el Nogueira Trigás se servirán ponerlo á mi disposicion.

Dado en Arzuá á 3 de agosto de 1859.—Luis Genton y Alvarez.—Por su mandado, Silvestre Paredes.

Don Antonio Dopico y Teijeiro, teniente de la segunda compañía del batallón provincial de la Coruña núm. 42 y fiscal militar nombrado para formar sumaria al desertor de Milicias provinciales Antonio Alonso Pescada.—Habiéndose desertado del hospital militar de esta ciudad de Orense el quinto de Milicias provinciales Antonio Alonso Pescada, y cumpliendo con lo prevenido por S. M., llamo y cito al expresado individuo para que en el término de diez dias al contar desde la publicacion de este tercer edicto, se presente en el cuartel de san Francisco de la misma y de no efectuarlo se procederá contra él con arreglo á ordenanza.

Orense 7 de agosto de 1859.—Antonio Dopico.

REAL ACADEMIA

DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS.

PROGRAMA

DEL CONCURSO A LOS PREMIOS QUE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ESTATUTOS ADJUDICARÁ EN LOS AÑOS DE 1860, 1861 Y 1862.

Para el concurso año de 1860.

1.º ¿Conviene uniformar la legislación de las diversas provincias de España sobre la sucesion hereditaria y los derechos del cónyuge sobreviviente?

Examinando la legislación de Castilla y la de las provincias que se separan de ella, y considerando sus varias disposiciones con relacion á la familia, á la sociedad y á las instituciones políticas, así como las ventajas de la uniformidad y los inconvenientes de establecerla, debe procurar el que aspire al premio, de-

mostrar, en el caso de que se decida por una legislación uniforme, los motivos en que se funde el sistema que prefiere, y el tiempo y el modo de plantearlo en todas las provincias.

En el caso de no creer conveniente ó posible uniformar la legislación, debe examinar si la que rige en algunas provincias se ha de conservar íntegra ó necesita algunas reformas, y cuáles hayan de ser estas.

2.º Reseña histórica de la Beneficencia en España; principios que convendrá seguir para enlazar la caridad privada con la beneficencia pública; hasta dónde deben extender su accion el Estado, las asociaciones caritativas y los particulares: medios de poner en armonía esta accion respectiva, fundándola en la economía social y en el sentimiento moral y religioso.

Para el concurso de 1861.

1.º Ventajas ó inconvenientes de una liga aduanera peninsular, y su influencia en la agricultura, industria y comercio de España.

En el caso de decidirse por la afirmativa el autor de la Memoria, deberá examinar los obstáculos que puedan presentarse y el medio de removerlos, así como los pactos y condiciones necesarias para asegurar la recíproca utilidad de las naciones confederadas.

2.º Del poder civil en España desde los Reyes Católicos, causas de su preponderancia; instituciones y clases en que se apoyaba, y vicisitudes que ha tenido hasta el establecimiento del Gobierno constitucional.

Para el concurso de 1862.

1.º Medios de fomentar la poblacion rural en todas las provincias de España.

Debe el autor hacer un examen del estado presente de la poblacion rural de las diversas provincias, y de los obstáculos así físicos como legales, económicos y sociales que en la mayor parte de ellas se opongan á su desarrollo y aumento, y exponer los medios mas eficaces, directos ó indirectos que puedan emplearse por el Gobierno, por asociaciones y por particulares para el fomento y prosperidad de dicha poblacion en todo el Reino.

2.º Estado de la agricultura, artes y comercio de España en el siglo XVI: leyes que contribuyeron á su desarrollo: causa de su inmediata decadencia: política comercial de España y su influjo en bien ó en mal de la nacion: sistema económico que la ciencia y la experiencia aconsejan seguir para fomentar nuestra riqueza pública.

Los premios que se han de conceder á las obras que á juicio de la Academia lo merezcan, consistirán cada uno en una medalla de bronce, ocho mil reales en dinero y doscientos ejemplares de la obra que fuese premiada, reservando el derecho de propiedad al autor. Podrá además la Academia conceder á el mismo el título de Académico correspondiente, si considerase sus trabajos como de mérito extraordinario.

La Academia, adjudique ó no el premio, se reserva declarar el accésit sobre dichos puntos á todas las obras que crea dignas de él, que consistirá en un diploma y en la impresion y entrega de doscientos ejemplares al autor de la Memoria.

Las obras para optar á premios se remitirán al Secretario de la Academia

antes de 1.º de setiembre del año á que correspondan. Acompañará á cada una un pliego cerrado en que conste el nombre y residencia del autor y que esté sellado en la cubierta con el lema adoptado por cada uno, y escrito al principio de su obra para distinguirla de los demas. Declarados los premios se abrirán solemnemente los pliegos correspondientes á las obras premiadas, inutilizándose los demas en la Junta pública en que se haga la adjudicacion.

Los Académicos de número no pueden aspirar á los premios.

Madrid 3 de julio de 1859.—Por acuerdo de la Academia, Pedro Gomez de la Serna, Secretario.

ESCUELA NORMAL DE ORENSE.

La matricula se hallará abierta desde 15 de agosto al 15 de setiembre, debiendo los aspirantes sufrir examen previo en que acrediten su idoneidad, y presentar los certificados siguientes:—

1.º De bautismo, para probar que su edad es mayor de 17 años y menor de 25.

2.º De buena conducta; dado por el párroco, con el V.º B.º del Alcalde de su domicilio.

3.º De un profesor de medicina, para probar que no tiene defecto visible, ni padece enfermedad contagiosa.

4.º De haber satisfecho 40 rs. por el primer plazo de matricula. Además, los aspirantes deben traer licencia de sus padres, tutores ó encargados.

Orense 8 de agosto de 1859.—El director accidental catedrático de religion y moral, Manuel Cortés y Gonzalez.—Domingo Antonio Farinas, secretario.

SECCION DE ANUNCIOS.

MANUAL DE MILICIAS PROVINCIALES Y QUINTAS.

Contiene la ley de Milicias provinciales é instruccion para su ejecucion, la ley de reemplazos, el reglamento de exenciones físicas y los Reales órdenes que han salido hasta hoy, alterando ó aclarando aquellas leyes; todo comentado y añadido con formularios de expedientes de cuanto puede ocurrir. Se vende en Madrid á 8 rs. en la libreria de D. Leon P. Villaverde, calle de Carretas núm. 4 y se remite franco mandando al Sr. Villaverde 9 rs. en sellos ó libranzas.

En las diferentes notas de escribanos difuntos que se hallaren en el archivo de la jurisdiccion de Sobrado, distrito del mismo nombre, partido judicial de Arzuá, provincia de la Coruña, que está al cuidado de D. Andres Ares y Fernandez escribano de número de dicha jurisdiccion, se hallan varios foros y arriendos de las fincas pertenecientes al ex-priorato de San Bernardo de Tibianes y Rechala dependiente del ex-monasterio de este expresado pueblo de Sobrado. La persona que le interese alguno de los citados documentos puede entenderse con dicho escribano quien se los facilitará. Lo que se anuncia al público. Sobrado agosto 9 de 1859.—Andres Ares y Fernandez.